

TEXTO I

Los fenómenos naturales que se transforman en desastre son pulsaciones de fuerza brutal que tienen explicaciones geológicas y meteorológicas claras, ajenas al sufrimiento de quienes los padecen. Esa precisión de los científicos e ingenieros es la que nos tiene que ayudar a reconstruir el rastro que dejan. Sabemos cómo ocurren, conocemos la magnitud y los niveles de esas fuerzas que literalmente nos golpean por tierra, mar y aire. Por eso, las escuelas de las ciudades del siglo XXI no pueden derrumbarse con los niños y los maestros dentro, los postes de la luz no deben caer sobre los viandantes, la gente no tiene que ahogarse en las autopistas con su familia dentro del coche. Tiembla la tierra, y ese terremoto, por falta de previsión, de planificación y compromiso con la ciudadanía, destruye las casas, sepulta a sus habitantes. Las lluvias torrenciales y los vientos huracanados han transformado ciudades y pueblos de islas y Estados en ciénagas desdichadas, en parajes derruidos. Los terremotos que han asolado México, y los huracanes que han golpeado las islas del Caribe y los Estados del sur de Estados Unidos, o las lluvias monzónicas que han anegado el sur de Asia suman miles de muertos y millones de desplazados, y esto no puede dejarnos indiferentes.

Con las nuevas tecnologías contemplamos la destrucción en tiempo real. Hemos visto el temblor de la tierra deshacer edificios en cuestión de segundos. Hay todavía gente dentro esperando que la rescaten. Los fenómenos naturales no pueden ser una excusa que justifique infraestructuras obsoletas que se convierten en trampas mortales. En tierras de temblores, huracanes y lluvias torrenciales hay que reconstruir honrando a las víctimas. A los que han muerto, a los heridos, a los que lo han perdido todo. Que este dolor no signifique que unos pocos accionistas de empresas de construcción o suministros se van a hacer más ricos de lo que ya son. El compromiso transnacional con todas las víctimas de estos desastres naturales que se podían haber mitigado con mejores infraestructuras no puede dejar que se especule con su desesperación. Debemos prohibir que los fenómenos naturales coticen en Bolsa convertidos en desastres.

(Ana Merino, El País, 25 de septiembre de 2017, adaptación)

TEXTO II

Cuando a principios de julio saltó a los medios de comunicación el caso de la niña Inés, que fue expulsada de un campamento de verano por la queja de un grupo de padres, no me extrañó en absoluto. Soy madre y escucho a otras madres en la puerta de los colegios. Sé muy bien que a alguna gente le estorba la discapacidad de los compañeros de sus hijos. La ven como un lastre para la trayectoria y buena progresión de sus hijos perfectos. No. No se espanten. Esas personas jamás lo reconocerían en público.

La escuela debe ser inclusiva. Los maestros trabajan en muchos frentes. Propician esa normalización en clase, también en los recreos, pero si esos valores no se practican en casa, si de verdad no se inculca a los hijos que la diferencia forma parte de nuestras vidas, seguirán ocurriendo casos como los de Inés, y de tantos otros niños, como estamos viendo este año en la prensa.

Esta cascada de niños discriminados por su discapacidad, que vamos conociendo cada semana, es la consecuencia natural de ese postureo social y político, que legisla sin proveer de dotación económica suficiente. Si la inclusión no nace de una convicción profunda de la sociedad, seguirá habiendo discriminación. Cuando no se destinan los recursos necesarios para que la inclusión sea efectiva, no dejará de haber discriminación. Cuando se enarbola la bandera de la discapacidad para conseguir sellos de calidad, premios, reconocimientos u obtener votos del electorado estamos jugando con los derechos humanos de un diez por ciento de la población para el que las leyes se quedan en papel mojado casi siempre.

Si se fijan, la mayoría de los casos se producen una vez que los niños están inscritos en los campus. En los formularios de inscripción se contempla la discapacidad. Los padres marcan la casilla. Explican y se aseguran de que sus hijos estarán atendidos, pero cuando llega el momento de la verdad, vienen las trabas. ¿De qué me suena? ¿Qué está ocurriendo?

Muchos de estos campamentos, promovidos por la administración, tiran a la baja en los concursos públicos. La concesión del servicio se la lleva el mejor postor. Bajos presupuestos, menos monitores, atención justa para niños normotípicos. En cuanto hay que dedicar más tiempo, mayor atención o una atención más especializada, no salen las cuentas. El niño es invitado a marcharse o directamente solo hay plaza para uno, como en el caso de Mallorca, donde se advertía que las plazas para niños con discapacidad estaban limitadas.

Las familias están perdiendo el miedo a denunciar estas situaciones. El problema se está visibilizando. Solo es la punta del iceberg. Y surgirán más casos si se sigue menospreciando la discapacidad, en casa, en la escuela, en la política.

(Nuria del Saz: eldiario.es, 17/07/2019, adaptado).